

C.A. de Valdivia

Valdivia, tres de enero de dos mil veintidós.

Visto:

Que el señor Natalio Vodanovic Schnake, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, en los autos del Juzgado del Trabajo de Valdivia, caratulado “Retamal González con Fisco de Chile”, Rit O-27-2021, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia de 23 de noviembre de 2021, pronunciada por la señora Alodia Prieto Góngora, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que declara:

I.- Que se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Gobernación Provincial de Valdivia, rechazándose por tanto la demanda a su respecto.

II.- Que se acoge la demanda interpuesta por don MARCO ANTONIO LEAL RUIZ, abogado, en representación de doña YASNA IVON RETAMAL GONZALEZ, en contra del Fisco de Chile, solo en cuanto se declara:

1.- Que entre la actora y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Servicio de Gobierno Interior existió una relación laboral, desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

2.- Que el término de la relación laboral se produjo por aplicación injustificada de la causal de vencimiento del plazo convenido.

3.- Que la demandada deberá pagar a la demandante las siguientes sumas:

a) Por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, \$982.108.-

b) Por concepto de indemnización por cuatro años de servicio y fracción superior a seis meses, \$4.910.540.-

c) Por concepto de aumento del 50% de la indemnización anterior, \$2.455.270.-



d) Reajustes e intereses, calculados conforme al artículo 173 del Código del Trabajo.

III.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.

Dese cumplimiento en su oportunidad a lo dispuesto en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Anótese, regístrese, y archívese en su oportunidad.

La primera causal que invoca es la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, porque la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pues -en su concepto- no existe prueba, ni razonamiento alguno que explique lo resuelto, configurándose la causal de nulidad. Afirma que si en la apreciación de la prueba se hubiere seguido las reglas de la sana crítica, contenidas en el artículo 456 del Código del Trabajo, sólo se habría arribado a la conclusión fáctica de que no hubo entre las partes una relación de carácter laboral, sino que civil y que existió un término del contrato a honorarios ajustado a derecho.

Pide anular la sentencia impugnada en cuanto acoge la demanda y condena al órgano demandado estableciendo la existencia de relación laboral, con desapego a las normas de la reflexión de sana crítica, lo que configura la causal del artículo 478 b) en relación con el artículo 456, del Código del Trabajo; y acudiendo a la misma, dar por establecidos los hechos tal cual precedentemente hemos referido, lo que determina concluir que no ha existido relación laboral y por ende que la desvinculación del actor no se produjo por un despido injustificado, por lo que se rechaza la demanda en todas sus partes.

En subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto es necesaria una alteración de la calificación



jurídica de los hechos efectuada por el tribunal inferior, sin modificar las conclusiones fácticas de éste, concretamente se pide se invalide la sentencia y, acto seguido, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace la demanda en todas sus partes, con costas, por cuanto la relación entre las partes fue la propia de la contratación civil a honorarios, y no una atendida al Código del Trabajo.

El recurrente afirma que se encuentra configurada esta la causal de nulidad pide se invalide la sentencia y, acto seguido, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

En subsidio, invoca la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse incurrido el fallo en vulneración legal que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Sostiene que se han infringido las siguientes normas: Los artículos 1 y 96 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo y artículo 15 de la ley N°18.575 en relación con el artículo 11 del aludido Estatuto Administrativo; los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República; los artículos 1°, 3°, letras a) y b), 5°, 7°, 8°, 160, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal; los artículos 1545 y 1546 del Código Civil; y artículo 510 del Código del Trabajo. Pide que se anule la sentencia recaída en esta causa y se dicte una de reemplazo, que efectuando una correcta aplicación de las normas infringidas, rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

Afirma que la sentencia incurre en el motivo de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, al acoger la demanda condenando a su representado al pago de indemnizaciones y prestaciones improcedentes, y, por ende, como petición concreta, pide que se anule la sentencia recaída en esta causa y se dicte una de reemplazo que, efectuando una correcta aplicación de las normas infringidas, rechace la demanda en todas sus partes, con costas.



La audiencia para la vista del recurso se realizó el 21 de diciembre de 2021, oportunidad en que el apoderado de la recurrente Fisco de Chile alegó por el recurso, reiterando los antecedentes del mismo.

¿Oído y considerando:

¿Primero: La primera causal que invoca el recurrente Fisco de Chile es la de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, porque la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, pues -en su concepto- no existe prueba, ni razonamiento alguno que explique lo resuelto, configurándose la causal de nulidad.

¿Segundo: La infracción que se denuncia la hace consistir en que la sentencia vulnera -entre otros que menciona- los principios de la no contradicción y de la razón suficiente y que se desatienden las normas sobre la apreciación de la prueba. Afirma que entre las partes no existió vínculo laboral alguno, razón por la cual no cabe hablar de cuestión suscitada entre un “empleador” y “trabajador”, ya que se trató de un vínculo sustentado en una prestación de servicios profesionales bajo la modalidad de honorarios a suma alzada. Añade que la mala aplicación de las normas de la sana crítica llevó al tribunal a hacer una falsa aplicación del artículo 489 del Código del Trabajo y de esa forma acoger la demanda y ordenar el pago de las prestaciones señaladas al inicio.

¿Tercero: Como se ha dicho en otras oportunidades, la infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, hecho denunciado como primer motivo de la nulidad, ha de tratarse de una alteración que sea evidente a la lectura del fallo. Al contrario, la sentencia detalla la prueba aportada al juicio y la forma en que la señora Jueza razona, para arribar a una decisión, no constituye la infracción denunciada, pues se encuentra facultada por el legislador para dar mayor valor a la prueba entregada por la demandante, desestimando así los argumentos y antecedentes dados por la parte demandada, razones



que esta Corte comparte, por lo que se rechazará el recurso, en este acápite.

?Cuarto: En subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto es necesaria una alteración de la calificación jurídica de los hechos efectuada por el tribunal inferior, sin modificar las conclusiones fácticas de éste, concretamente se pide se invalide la sentencia y, acto seguido, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace la demanda en todas sus partes, con costas, por cuanto la relación entre las partes fue la propia de la contratación civil a honorarios, y no una regulada por el Código del Trabajo.

?Quinto: La recurrente sostiene que si la sentencia contuviese una adecuada calificación jurídica de los hechos habría establecido que las labores para las cuales fue contratada la actora fueron cometidos específicos y temporales y, en consecuencia, habría concluido que su contratación se encuentra conforme lo establece el artículo 11 del Estatuto Administrativo, debiendo rechazar la demanda en todas sus partes.

?Sexto: Sobre este punto, la sentencia recurrida ha dejado asentado (motivo decimocuarto) lo siguiente:

?Que no obstante titularse los contratos como “contratos de honorarios a suma alzada”, la prueba rendida permite acreditar que se trató de un solo contrato de trabajo vigente desde el 1 de marzo de 2016 entre la demandante y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública-Servicio de Gobierno Interior. En efecto, los documentos dan cuenta del control a que se encontraba sujeta la demandante, de los derechos que tenía a feriado legal, permisos, descanso de maternidad postnatal, postnatal parental, fuero maternal, derecho a alimentar el hijo menor de dos años, de la obligación de presentar licencia médica en caso de ausentarse de sus funciones, y si bien se establecía como pago por sus servicios una suma única ella se dividía en cuotas mensuales.



Que los contratos señalan la forma en que será controlado y evaluado el trabajo de la actora en cuanto a su avance, cantidad y calidad (por la Gobernadora de Valdivia los años 2016, 2017 y 2018 y por el jefe de la unidad los años 2019 y 2020); y del informe mensual, escrito y detallado que la demandante debía emitir con el visto bueno del funcionario que supervise su desempeño. Los contratos de los años 2019 y 2020 aluden a quién actuará como supervisor de las tareas encomendadas a la actora. Los contratos de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, estipulan la jornada de trabajo semanal y la forma de control del ingreso y salida del Servicio.

Todos estos acuerdos, dan cuenta de la relación de subordinación y dependencia a que estaba sujeta la demandante; y descartan un contrato de prestación de servicios, en que la actora se hubiera desempeñado de manera independiente, o realizado labores accidentales y no habituales o prestado un servicio para cometidos específicos, lo que se desprende del tenor literal de los contratos. Dicha independencia, labores accidentales y no habituales y los cometidos específicos se descartan también con la descripción de funciones de la actora, contenidos en los contratos de los años 2019 y 2020, y en el Memorándum N° 3 de 20 de enero de 2019.

Que los testigos de la demandante se refieren también al horario, a los informes de actividades de la actora, que esta última desarrollaba sus labores utilizando los implementos entregados por la Gobernación Provincial, antecedentes todos que dan cuenta de los hechos en los mismos términos concluidos por el Tribunal.

Séptimo: Que la norma del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo dispone que el recurso de nulidad procede cuando se altere la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones sobre los hechos que haga el tribunal inferior y de la lectura de la sentencia queda en evidencia que, en la decisión la señora juez hizo un proceso lógico interpretativo al aplicar la normativa que sirve de sustento para



acoger la acción conforme a los hechos probados en juicio y en este caso no es posible cambiar la calificación jurídica de los mismos, como se pretende, razón que se estima suficiente para rechazar el recurso en este acápite.

Octavo: En subsidio, alega la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse incurrido el fallo en vulneraciones legales que ha influido sustancialmente en lo dispositivo. Sostiene que se han infringido las siguientes normas: Los artículos 1 y 96 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo y artículo 15 de la ley N°18.575 en relación con el artículo 11 del aludido Estatuto Administrativo; los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República; los artículos 1°, 3°, letras a) y b), 5°, 7°, 8°, 160, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal; los artículos 1545 y 1546 del Código Civil; y artículo 510 del Código del Trabajo.

Octavo: En efecto, el último capítulo de nulidad se denuncia infracción de los artículos 1 y 96 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo y artículo 15 de la ley N°18.575, en relación con el artículo 11 del aludido Estatuto Administrativo y la hace consistir en la sentencia recurrida infringió el artículo 1° de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, al no dársele su debida aplicación, pues que de acuerdo a su tenor “Las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los Servicios Públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso 2° del art.18 de la Ley N°18.575”.

En su concepto transgrede también la sentencia el artículo 15 de la ley N°18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, que, concordante con la norma anterior, previene que “El



personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley en las cuales regulará el ingreso, los derecho y deberes, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.”.

Añade que la sentencia ha infringido, también, el artículo 11 de la ley N°18.834, al no ser aplicado al caso de autos, toda vez que en dicha norma, se señala en su inciso primero que: “La Administración- podrá contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la institución” y, además, según su inciso segundo que “[...] se podrá contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos conforme a las reglas generales” y, que agrega su inciso tercero: “las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las normas de este Estatuto”.

Noveno: En segundo lugar, denuncia infracción a los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República y la hace consistir en que sentencia, al hacer lugar a la demanda sub lite, no solo infringe normas de leyes del Derecho Público Administrativo sino que también contraviene normas de rango constitucional, como las mencionadas, que establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (para el caso concreto, el artículo 11 del Estatuto Administrativo y demás normas de Derecho Público Administrativo aplicables), deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia y los gastos en que incurran deben estar expresamente autorizados en la ley. El principio de juridicidad de las aludidas normas constitucionales determina, entre otros, la forma en que el Estado contrata al personal de sus Servicios, encontrándose obligado a cumplir con la normativa vigente.



Décimo: En tercer lugar, denuncia infracción a los artículos 1°, 3°, letras a) y b), 5°, 7°, 8°, 160, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal. Sostiene que no puede estimarse aplicable el Código del Trabajo al caso, habida cuenta que su aplicación supletoria se refiere a funcionarios de la Administración, en circunstancias que las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad de funcionarios o trabajadores del Estado, sino que la de contratados sobre la base de honorarios sometidos exclusivamente a las normas de su respectivo contrato de prestación de servicios. De suerte que en este caso cabía negar lugar a una aplicación supletoria del Código del Trabajo en cuanto éste se refiere a funcionarios públicos regidos por estatutos o regímenes especiales. Entre otros argumentos, sostiene que se ha incurrido en una falsa aplicación tácita de los artículos, 5°, 7° y 8° del Código del Trabajo, dado que si se hubieran aplicado correctamente dichas normas, necesariamente se habría tenido que concluir que en el caso de autos no se dan los elementos para dar por establecida la existencia de una subordinación y dependencia, pues tales requisitos no se presentan, porque ello implicaría prescindir de lo previsto en el estatuto jurídico por el que se rige el contrato celebrado entre las partes, al cual éstas deben ceñirse, por disposición expresa del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

¿Añade que se han infringido gravemente, por falsa aplicación del artículo 168 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 160, 163 y 173, del mismo cuerpo legal, al otorgársele indemnizaciones de carácter laboral e incrementos a persona que no reúne los requisitos para acceder a dichos beneficios, y cuyo convenio a honorarios no contemplaba su concesión.

Undécimo: Además, denuncia infracción de los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, al no ser aplicados debidamente al caso, contratos son ley para los contratantes. Si el tribunal hubiera dado debida



aplicación a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, habría tenido necesariamente que concluir que la regulación de los derechos y obligaciones de las partes de este juicio estuvo dada por los convenios de prestación de servicios entre ellos celebrados los cuales, para todos los efectos legales, eran el estatuto especial por el que debían regirse para el cumplimiento de los mismos.

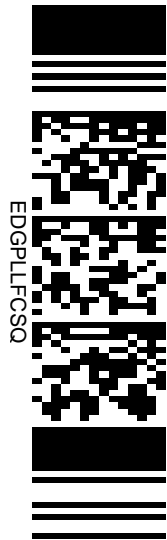
Duodécimo: Por último, alega que ha operado la prescripción, pues el plazo de dos años contemplado en el artículo 510 del Código del Trabajo, se ha cumplido con creces. Dicho plazo debe computarse desde el inicio del vínculo cuyo reconocimiento se pretende. En el caso de marras, la relación laboral es reconocida desde marzo de 2016, esto es, el plazo de prescripción se encuentra cumplido.

Decimotercero: Que no obstante los argumentos de quien recurre -basados en una tesitura que fue desestimada- se estima que al resolver el litigio el tribunal laboral interpretó las normas en cuestión ceñido a un criterio legal -que puede ser objeto de interesantes debates- pero la normativa que el recurrente señala como infringida, no lo está desde el análisis jurídico que hace la señora juez laboral, quien dicta una sentencia bien fundada en todas sus decisiones, las que esta Corte comparte; y, en consecuencia, se determina que el tribunal a quo no ha incurrido en la infracción del artículo 477 del Código del Trabajo, como se denuncia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que disponen los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por el señor Natalio Vodanovic Schnake, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por la señora Alodia Prieto Góngora, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, sentencia que no es nula.



Regístrese y comuníquese.
Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.
NºLaboral - Cobranza-270-2021.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Samuel Muñoz W., quien no firma no obstante haber haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo por encontrarse con feriado legal , Carlos Isaac Acosta V. Valdivia, tres de enero de dos mil veintidós.

En Valdivia, a tres de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

